

Crónica del mes

Septiembre

Elías Antonio Saca, tras sus primeros cien días de labor como presidente de la República, ha seguido manteniendo los niveles de popularidad que lo catapultaron a la primera magistratura del país en marzo pasado. Uno de los sondeos publicados al calor del optimismo gubernamental daba un rotundo espaldarazo al mandatario: los salvadoreños lo calificaban con una nota de 7.5 sobre 10. El presidente celebraba con sus allegados. Pronto vendrían más resultados repitiendo el mismo estribillo: Saca había logrado mantener una imagen positiva, transcurridos los primeros tres meses de su gestión. Entre tanto, la oposición parecía desaparecer del espectro político salvadoreño. Las ya trilladas disputas al interior del FMLN —único indicio que delataba la existencia de una oposición en el país, al menos en la agenda de los medios de comunicación— no acapararon la misma atención de la ciudadanía, que se hallaba pendiente de un gobierno que le prometió empleos, seguridad y buenos servicios públicos, es decir, una vuelta a la cuestión social, sistemáticamente descuidada por el gobierno anterior.

Pero no todos se mostraron conformes con el rumbo tomado por Casa Presidencial en los primeros tres meses. La mayoría de los entrevistados en el sondeo arriba mencionado indicó que el principal desatino de Saca ha sido el envío de un tercer contingente de soldados salvadoreños a Iraq, seguido del aumento de los requisitos para la jubilación. El matutino *La Prensa Gráfica* añade otra percepción de los salvadoreños: El Salvador se encuentra en el rumbo correcto, pero su situación general es considerada mala (34.5 por ciento de los entrevistados) o muy mala (19.5 por ciento). En lo que a la situación económica se refiere, el sondeo concluye que más del 50 por ciento de la población

no ha visto cambios en la economía nacional desde que Saca llegó a la presidencia. Pese a ello, la expectativa favorable hacia el nuevo gobierno ha podido más que la opinión desfavorable sobre la situación del país y sobre las acciones impopulares de Saca, a la hora de evaluar los primeros pasos de la cuarta administración presidencial consecutiva del partido ARENA.

Como quiera que sea, hasta septiembre quedó bastante perfilado uno de los mayores retos del nuevo gobierno en el corto plazo: la reforma fiscal. Esta es condición necesaria para financiar el plan social anunciado por el gobernante desde que era candidato y que hasta la fecha aparece no más allá de las buenas intenciones del mandatario y su equipo. A la par de ello, nuevamente fue puesto en discusión el tema del presupuesto general de la nación, esta vez el correspondiente al próximo año. Las fracciones de la oposición política en la Asamblea ya condicionaron su apoyo a la propuesta del Ejecutivo a cambio de la prometida reforma fiscal. Por tanto, se avizoran intensas negociaciones políticas sobre temas claves para el país, como el presupuesto mismo, la ratificación del TLC, la reforma electoral, la reforma al sistema penitenciario y la reforma fiscal.

La lentitud de esta última y los manoseos en la conformación del Tribunal Supremo Electoral han sido motivos para que el principal partido de oposición, el FMLN, anuncie su posible retirada de la mesa de diálogo y entendimiento convocada por el mismo presidente Saca. Así, el FMLN, con todo y su tumultuosa trayectoria, en las últimas semanas ha puesto en tela de juicio la efectividad de las mesas de discusión instaladas por el Ejecutivo como recurso político para dar un mensaje de apertura. Las intenciones del FMLN no hacen sino

comunicar la impaciencia que podría venir sobre muchos sectores nacionales si las tantas mesas no dan resultados concretos. Con todo, al menos hasta septiembre, no debería haber mayor preocupación en Casa Presidencial, pues las contadas obras concretas y las buenas intenciones han sido suficientes para mantener las expectativas favorables de la mayoría de los salvadoreños.

En suma, septiembre ha sido escenario de un creciente optimismo por parte del Ejecutivo y de una gran parte de la población. En términos económicos, el país deberá enfrentar ingentes retos como el sostenido incremento de los precios internacionales del café, la contracción de las exportaciones de maquila y el endeudamiento público. En este escenario complicado, el presidente de la República ha prometido una reforma social de grandes pretensiones en reducción de la pobreza y generación de empleos, por ejemplo. Está por verse el cumplimiento de las promesas electorales vertidas al calor de la campaña.

Pero el presidente puede contar con un importante aliado a su favor. A lo largo del mes, la prensa nacional —escrita, radial y televisiva— dedicó sendos espacios a la actividad de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. La cobertura incluyó desde la discusión sobre las reformas fiscales y el plan social, hasta la visita del mandatario a la cumbre de jefes de Estado de la ONU, pasando por la ejecución del Plan Súper Mano Dura, la situación del sistema penitenciario y la decisión presidencial de mantener el apoyo salvadoreño al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Sobre el primer asunto, trascendió que Antonio Saca, como parte de su plan social, se ha fijado como meta disminuir la pobreza extrema en siete u ocho puntos porcentuales, que según el PNUD afecta al 23 por ciento de los salvadoreños. Sin embargo, contrasta con lo anterior el problema fiscal del país, que dificulta, a todas luces, el éxito de cualquier reforma social de largo alcance.

El primer día del mes, entrevistado por un rotativo nacional, el secretario técnico de la presidencia, Eduardo Záblah, hablaba con bastante soltura y naturalidad sobre los desafíos fiscales de corto y mediano plazo. Para el funcionario, el programa fiscal que prepara el gobierno “no es un plan que regale dinero que no tiene, [sino que] está diseñado para poder ejecutarse con muy poco dinero”. Los planes del gobierno hablan de la captación de unos 300 millones de dólares adicionales. Seguidamente, el

funcionario dio un adelanto, siquiera general, sobre el financiamiento de dicho plan: “el presupuesto se trabaja por dos lados: ingresos y egresos. Está la reforma fiscal, el FOSALUD, el crecimiento económico... Y por el lado de los egresos, reducirlos al máximo. Estamos en austeridad”, concluyó Záblah. Días después, el 7, el presidente Antonio Saca aseguró que su gobierno no disponía aún de un plan definido de reforma fiscal. “Sobre mi escritorio solo hay memorandos de ideas y el ministro de Hacienda y el secretario técnico las están discutiendo con diferentes sectores”, dijo; luego concluyó que el “plan social depende de [la] reforma fiscal”, algo en lo que se hallan de acuerdo los analistas económicos y sociales del país.

En otro orden, siguiendo con la cobertura de las actividades del Ejecutivo, el día 6, el ministro de Gobernación, René Figueroa, anunció la conformación de una mesa encargada de plantear soluciones al problema del sistema penitenciario del país. “La visión va a ser integral. En el tema de penales también hay que hablar de la rehabilitación que se debe de dar en esos centros de detención”, dijo el funcionario. Las declaraciones se dan semanas después de la matanza del penal de Mariona, donde murieron 31 reos debido, entre otras causas, al hacinamiento y la mezcla de internos comunes con pandilleros. El 9 de septiembre, autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron, en su balance de los primeros cien días de gestión, que el número de homicidios se había reducido a cuatro por día, debido a las reformas penales y el lanzamiento del Plan Súper Mano Dura.

Por otro lado, el 7, debido a la decisión del mandatario hondureño, Ricardo Maduro, de retirar el apoyo financiero de su país al Parlamento Centroamericano, el presidente salvadoreño expresó su voto de confianza a la institución regional, pese a reconocer la necesidad de cambios estructurales a la misma. “El PARLACEN hay que hacerlo más práctico, más vinculante, pero no estoy de acuerdo con que desaparezca, porque es un organismo de integración que bien manejado envía el mensaje correcto”, dijo. “No tengo ninguna opinión sobre la decisión de Honduras —prosiguió Saca—, pero aquí en El Salvador sí estamos pensando en apoyar el PARLACEN”, concluyó. Maduro había dicho un día antes que “el Parlamento no ha hecho absolutamente nada por la integración centroamericana”. y había anunciado su retiro del mismo, en confrontación con el presidente de esa entidad, el también hondureño Mario Facussé.

De regreso a la política doméstica, el 13, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo Meneses, aceptó, basado en datos oficiales, que el número de homicidios diarios en El Salvador ascendía a siete: 1 797 personas asesinadas entre enero y agosto de 2004, matizando la apreciación hecha días antes. Meneses aseguró que, durante los primeros 15 días de ejecución del Plan Súper Mano Dura, había habido una disminución de 40 asesinatos respecto de 15 días antes de la implementación de ese plan. El día 16, el subdirector de la Policía, Pedro González, aseguró que, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Saca, habían comenzado a operar los Grupos de Tarea Antipandillas (GTA) en algunas de las ciudades de mayor índice delincencial.

Para culminar el repaso de la actividad del Ejecutivo, el 22 de septiembre, el presidente Saca leyó su discurso ante la asamblea general de la ONU, donde pidió un espacio para El Salvador en el consejo de seguridad, fijó elementos de su política internacional y puso en alto sus logros sociales, políticos y económicos realizados en escasos cien días. La razón del encuentro tenía que ver con la convocatoria de los mandatarios de Brasil, Francia, Chile y España para combatir el hambre en el mundo. En términos generales, la magnitud real del hambre y la miseria en el mundo, así como el cinismo de los apologistas de la guerra en Iraq marcaron la tónica de la reunión internacional. Pero Saca utilizó el foro mundial como altavoz para la misma propaganda que ha difundido mañana, tarde y noche a través de los medios de comunicación salvadoreños.

El mandatario salvadoreño dedicó un espacio breve, si se lo compara con el tiempo que consagró a hablar de sus logros, para sentar la posición de su gobierno ante algunos de los grandes problemas internacionales: el intento de Taiwán por obtener el reconocimiento a su legitimidad como Estado y aislar diplomáticamente a la República Popular China y el conflicto en Palestina. El apoyo del gobierno de Saca a las pretensiones de Taiwán por hacerse de un puesto en el organismo internacional no es nada nuevo. Contra toda lógica comercial y guiado por un dogmatismo ideológico, El Salvador cree que “marginando” a la República Popular China se mantiene como baluarte en la lucha contra el comunismo, en vez de abrir los ojos a esa realidad que, como dijo el propio Saca, “cambia constantemente”. “Esta delegación” —declaró Saca en su intervención— apoya que se examine

la situación excepcional de la República de China en Taiwán y su eventual participación en este foro”. En lo tocante al conflicto en Palestina, Saca fue más cauteloso y expresó que el problema entre Israel y el pueblo palestino “es motivo de incesante preocupación para nuestro país, por la violencia incesante, la falta de control de grupos terroristas y las dificultades cada vez mayores para volver a la vía del diálogo y el entendimiento político”.

Lo que sí resultó novedoso en el discurso presidencial fue la pretensión del gobierno de Saca de tener un puesto temporal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente salvadoreño justificó esta petición hablando de la pretendida ejemplaridad del proceso de paz y del “espíritu de colaboración” y el “compromiso” del gobierno de El Salvador con la paz mundial. Anteriormente declaró la voluntad de participar en las misiones internacionales de pacificación, como la que, según él, integra actualmente en Iraq.

Pero el contenido fundamental del discurso de Saca iba en la línea de insistir con sobrado optimismo en la reforma social. “Estamos trabajando en un plan social orientado a reducir la pobreza extrema en el próximo quinquenio”, dijo; luego anunció parte de su nuevo plan fiscal: “estamos empeñados en realizar una reforma fiscal que aumente la recaudación y disminuya la evasión fiscal”; más adelante, siempre en materia fiscal, dijo que aumentaría “el impuesto especial al tabaco, alcohol, armas y municiones, con el fin de propiciar un Fondo Especial para la Salud (FOSALUD) con el cual ampliaremos la asistencia sanitaria en las zonas rurales de mi país, combatiendo fuertemente el contrabando de estos productos”.

El presidente salvadoreño también dio una idea del lugar que ocuparía el tema educativo durante su gestión: “uno de los mejores mecanismos para aumentar nuestras posibilidades de desarrollo, es la inversión en la educación. Conscientes de ello, hemos lanzado el ‘Plan Nacional de Educación 2021’, el cual busca renovar la visión a futuro de la educación, por medio de compromisos programáticos de corto, mediano y largo alcance”. Finalmente, Saca se comprometió a “buscar vías alternas y compromisos renovados, conducentes a hacer más efectiva la lucha contra la pobreza”.

En fin, el presidente salvadoreño volvió sobre su plan social, pero esta vez su compromiso quedó fijado ante los gobernantes del mundo reunidos en

la ONU. Habló de la reducción de la pobreza, de la salud, de la educación y de la seguridad ciudadana, es decir, las mayores preocupaciones de los salvadoreños y de los que, sensibilizados por el hambre que padecen miles de seres humanos en el mundo, hicieron la convocatoria en las Naciones Unidas; pero nuevamente dijo poco sobre acuerdos concretos alcanzados en El Salvador. La sencilla razón es que no los ha habido hasta el momento. Incluso la misma empresa privada organizada —aliado incondicional del gobierno— difícilmente querrá escuchar sobre mayores imposiciones fiscales. En resumidas cuentas, Saca simplemente trasladó su discurso hasta la ONU y reprodujo su optimismo sin mayor fundamento más que el de las buenas intenciones de un mandatario que se dice cercano a la gente.

En lo tocante a la actividad de los partidos políticos ha destacado, por un lado, la carrera al interior del FMLN por agenciarse el control del partido en los comicios internos de noviembre próximo. Por otro lado, en ARENA se ha marcado el inicio de la campaña nacional en la búsqueda por recuperar espacios de poder en las futuras elecciones legislativas y municipales de 2006. Así, el FMLN siguió desgastándose debido a sus interminables disputas internas entre los llamados ortodoxos, liderados por Schafik Handal y los reformistas, cuyo máxima figura es el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortíz. En el marco de la disputa partidaria, el candidato ortodoxo para ocupar la coordinación general de ese instituto político, Medardo González, se inscribió a la competencia el primer día del mes; entrevistado por la prensa nacional, el postulante comentó que “la actual dirigencia del FMLN realizó un trabajo que la base reconoce y por eso creemos que es importante darle continuidad para que el partido siga acercándose al pueblo”.

En ese mismo escenario, muchos actores nacionales relacionaron una visita del cubano Ramiro Abreu, delegado político de La Habana para Centroamérica, con el proceso electoral del partido de izquierda. Sin embargo, el mismo Abreu desvirtúa esas apreciaciones en una entrevista publicada el día 5 de septiembre por *La Prensa Gráfica*: “algunos medios y funcionarios han dicho más de una vez que yo vengo a poner orden, a dar instrucciones al FMLN. Puedo asegurarte que es falso. Nuestras relaciones con el FMLN son de respeto, y no creo exagerado decir que soy yo el que, con mucha frecuencia, regreso

a La Habana con una visión más exacta y objetiva de la situación de El Salvador tras haber estado aquí”, comentó el visitante. Abreu había sido llamado a participar en una discusión sobre partidos políticos, a finales de agosto, y permaneció en el país durante dos semanas.

El FMLN, mientras tanto, seguía su proceso. El día 26, luego de una mediana cobertura de la prensa en la que primaba la disputa más que el entendimiento, el sector juventud de la línea dura del FMLN ratificó a su candidata María José Meléndez, como coordinadora de ese sector en el instituto político, ante la ausencia de votantes reformistas y los cuestionamientos de la prensa sobre el proceso electoral. Los jóvenes agrupados en el sector reformista desconocieron a las autoridades elegidas ese mismo día y dijeron que harían un trabajo paralelo, dando una nueva muestra del divisionismo que ha caracterizado el partido luego de los resultados electorales de marzo pasado. Similares disputas se dieron en el marco de la elección de la representante del sector femenino dentro de la máxima dirigencia partidaria y, en general, le fue imposible al FMLN deshacerse del halo del divisionismo.

ARENA describió una imagen harto diferente. El día 13, un rotativo de circulación nacional publica una entrevista con César Funes, director de asuntos políticos de la dirección del partido (COENA), quien anuncia la preparación de la estrategia de su instituto de cara a las elecciones legislativas de 2006. Funes insinuó cambios estructurales en el partido: “las reformas no deben ser cosméticas. ¿De qué serviría que se avance en la participación si al final la dirigencia recomienda por quién votar?”, comentó el también secretario de la juventud del gobierno de Antonio Saca. Pero, al menos durante el mes, las palabras no llevaron a hechos palpables que permitieran concluir que el partido oficial haya elegido el camino de su transformación. Días después, el 16, Antonio Saca, presidente de la República y presidente de ARENA, declaró que su partido se encontraba en campaña, animando a las bases y dirigentes de su partido. En este punto debe aclararse que nadie ha protestado por el hecho de que el presidente de la nación juegue al mismo tiempo a vocero de su partido mientras pretende gobernar escuchando a todos los salvadoreños.

Siempre en el ámbito político, durante el mes de septiembre también quedaron al descubierto de-

bilidades de algunas alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador, curiosamente todas gobernadas por el FMLN. Otro enfrentamiento entre comerciantes informales —quienes, al destruir el patrimonio municipal, traspasaron la frontera del estado de derecho— y las autoridades municipales dejó en evidencia la debilidad institucional de estas últimas para hacer frente a las demandas de un ejército de vendedores informales, que literalmente se han tomado las calles de los principales centros urbanos del país. En este punto, más que una mera disputa entre autoridades municipales y comerciantes teñida de bajas pasiones politiqueras, habría que decir que el problema del reordenamiento y orden de los centros urbanos salvadoreños exige un cambio de mentalidad en el Estado en su totalidad y en los ciudadanos, especialmente los que a diario transgreden el orden legal establecido.

En esa línea, el día 11, *La Prensa Gráfica* publica una entrevista realizada al alcalde municipal de San Salvador, Carlos Rivas Zamora, quien acepta que los comerciantes organizados le han ganado la batalla en su plan de reordenamiento del Centro Histórico de la ciudad capital: “los vendedores se sienten envalentonados porque varias instituciones han dicho que la alcaldía se equivocó con el reordenamiento”, dijo el edil. Rivas Zamora se refería a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que amparó la acción de los comerciantes y desvirtuó el proceder del Cuerpo de Agentes Metropolitanos leales a la alcaldía. La entrevista fue realizada luego que el Concejo Municipal capitalino delegara a la Policía Nacional Civil, vía ordenanza, las tareas de desalojos de ventas ilegales apostadas en calles y avenidas recuperadas por la municipalidad. Rivas Zamora declaró que la Alcaldía de San Salvador era incapaz de realizar esas tareas. Como respuesta, el viceministro de Gobernación, Rodrigo Ávila, se mostró en desacuerdo con la medida municipal y dijo que la PNC no obedecería órdenes de la comuna capitalina.

Días después, el 23, la máxima dirección del partido oficial, el COENA, ordena a todos los alcaldes de ese partido que se abstengan de firmar cualquier acuerdo con la compañía de manejo integral de desechos sólidos (MIDES) que junto con 11 municipalidades gobernadas por el FMLN administra el relleno sanitario de Nejapa. Días antes, el alcalde arenero de San Martín, Valentín Castro, sin consultar a la dirigencia de su partido, había firmado un contrato con esa compañía para depo-

sitar los desechos sólidos del municipio que gobierna. Tal medida le había acarreado sendas críticas de parte del mismo COENA.

Finalmente, el 28, un grupo de supuestos comerciantes informales arremetió contra las instalaciones de la alcaldía de Santa Tecla, causando considerables daños en la infraestructura y mobiliario de la misma, ante la pasividad de la Policía Nacional Civil que acudió tarde al lugar. Las críticas a la posición de la Policía no se hicieron esperar, incluso de algunas esferas del Ejecutivo. Un día después, otro grupo de vendedores atacó de igual modo el palacio municipal de la ciudad de Cojutepeque, enfrentándose esta vez a un contingente de policías que esta vez sí atendió el llamado de las autoridades municipales.

En lo que a la dinámica económica se refiere, destaca, por un lado, la introducción de un nuevo proceso de discusión del presupuesto general de gastos del Estado y el inicio de la negociación política para la ratificación del TLC con Estados Unidos; por otro lado, las fuentes oficiales indican un estancamiento de la productividad salvadoreña lo cual es contrarrestado, parcialmente, por el creciente flujo de remesas familiares al país.

El día 8, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que el ingreso de remesas familiares entre enero y agosto de 2004 fue de 1,641.4 millones de dólares, registrando un crecimiento anual de 21.1 por ciento en relación con el mismo período del año anterior. Solo en el mes de agosto ingresaron 224.4 millones de dólares, el máximo monto mensual del año. La misma fuente añadió que el ingreso por concepto de remesas familiares “es un importante elemento amortiguador del impacto directo e indirecto que están ejerciendo los altos precios del petróleo sobre la cuenta corriente de la Balanza de Pagos del país en los últimos meses”.

Por otro lado, el 10, el Ministerio de Economía comenzó la primera de una serie de reuniones entre el equipo negociador del TLC con Estados Unidos y una comisión especial de la Asamblea Legislativa, a fin de lograr el apoyo político para la ratificación del tratado comercial. De entrada, la postura del FMLN es que el acuerdo contiene algunos apartados que violan la Constitución, por lo cual habría que revisarlo. La reunión coincidió con la llegada al congreso salvadoreño de la traducción al español del texto oficial del tratado.

El 18, en el marco de la discusión por el presupuesto general del próximo año, el presidente del

Centro Alfa, Juan Valiente, entidad salvadoreña miembro de PREAL, dijo que el monto asignado a la cartera de educación para el 2005 no superará siquiera el 2.9 por ciento del PIB, cuando el organismo regional señala que los países deben invertir un 5 por ciento de su PIB en ese rubro para cumplir sus metas. “Sí es cierto que en la década de 1990 se hicieron esfuerzos importantes para incrementar el gasto por alumno, pero desde inicios del 2000 nos hemos estancado”, dijo Valiente.

El 28, un periódico nacional revela que el presupuesto programado por el Ejecutivo para el año 2005 se incrementaría en un 7 por ciento respecto del vigente, incluyendo 20 millones de dólares para Educación y 25 para la cartera de Salud. Trascendió, además, que el país traspasaría el límite del endeudamiento recomendado por los organismos internacionales al pedir la emisión de 539 millones de dólares en bonos. De acuerdo con la edición de *El Mundo* de ese día, el presupuesto tendría un incremento de 42 millones de dólares en concepto de gasto social, sobre todo en las carteras arriba mencionadas. De acuerdo con las fuentes oficiales citadas por ese diario, el presupuesto no incluye supresión de plazas ni recorte a ninguna de las carteras de Estado, rompiendo la constante de las últimas ediciones del plan general de gastos estatales. En la misma nota periodística, la fuente citada añade que “el plan social de Saca se financiará en gran medida con la emisión de deuda vía bonos, cuyo monto será de 539 millones de dólares para 2005, 253 millones más que los colocados este año”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las fracciones legislativas de oposición condicionaron su apoyo a la concretización de la reforma fiscal. Por otra parte, algunos analistas coincidieron en que se dejan muchos asuntos en la ambigüedad, como el prometido apoyo a la nueva cartera de Turismo pero la ausencia de asignación presupuestaria a la misma o el insuficiente incremento a los rubros de Educación y Salud en contraste con los ambiciosos planes del Ejecutivo en esas áreas.

Ese mismo día, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, aseguró que, aun sin prestamos internacionales, la deuda pública alcanzará el 40.1 por ciento del PIB nacional. Sin embargo, el funcionario dijo que con la reforma fiscal que prepara el gobierno se logrará paliar el impacto de dicha deuda.

Finalmente, el 29, el BCR informó que las exportaciones registradas de enero a agosto de 2004 alcanzaron un total de 2,135.7 millones de dólares,

creciendo 1.8 por ciento respecto al mismo período del año 2003. “Este resultado —precisa la fuente— se debió a una recuperación en las exportaciones de café y a un repunte de las no tradicionales”. De acuerdo al informe, el café habría recuperado sus precios —ubicándose en un promedio de 70.2 dólares por quintal, es decir, 9 dólares más que el año pasado— y experimentado una expansión de 3.2 por ciento en el volumen exportado. Otros sectores como el azúcar y el camarón describieron contracciones. “Los bienes no tradicionales —dice el comunicado emitido por el BCR— tuvieron una expansión de 10.7 por ciento con lo que alcanzaron un monto de 792.6 millones de dólares.

El BCR asegura también que las exportaciones de maquila continuaron decreciendo, registrando un total exportado de 1,204.0 millones de dólares y una reducción de 3.8 por ciento. La fuente explica dicho comportamiento con el “escaso crecimiento de la demanda de vestuario por parte de los Estados Unidos (0.9 por ciento hasta julio). También tiene un gran impacto la mayor competencia de otros países, en especial China, cuyas exportaciones de vestuario al mercado estadounidense crecieron 18 por ciento (919 millones de dólares); aunque también destacan con crecimientos positivos arriba del 15 por ciento Corea del Sur, Hong Kong, Macao, Indonesia y Colombia”.

Por último, el BCR concluye que las importaciones totales tuvieron un valor de 4,041.1 millones de dólares, creciendo 5.5 por ciento respecto a enero-agosto de 2003. La fuente añadió que los problemas que impactan el mercado petrolero incluyen “la mayor demanda de petróleo por parte de China, problemas con la oferta relacionados a la situación de Iraq, problemas financieros de la empresa rusa Yukos y problemas ocasionados por los huracanes Iván y Jeanne”. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, “el saldo de la balanza comercial salvadoreña tuvo un déficit de 1 905.4 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 10 por ciento respecto al 2003”. Para respiro del BCR, “el déficit señalado es cubierto en 86 por ciento por las remesas familiares, las cuales registraron un monto de 1 641.4 millones de dólares hasta agosto”.

En definitiva, lo primero sobre lo que hay que insistir, al cierre del mes de septiembre, es que el reducido margen de maniobra fiscal pone en duda la viabilidad de la reforma social planteada por el presidente Saca. Si en la pasada campaña electoral

quedó claro el desfase entre la política y la sociedad —es decir, una falta de correspondencia entre los intereses de los políticos y los de la colectividad—, la dinámica observada durante el presente mes parece arrojar luces sobre un visible desfase entre la reforma social y una necesaria reforma económica. Dicho en otros términos, hay que insistir en que la cacareada vuelta a lo social del presidente no será posible sin emprender ciertas reformas en el modelo económico vigente, uno de cuyos componentes fundamentales es la reforma fiscal.

Está de más insistir en la insalubridad de las finanzas públicas. Para nadie es un misterio que sin recursos a disposición las intenciones del nuevo gobernante se quedarán en nada más que eso. La pregunta es de dónde provendrá tales recursos. El equipo económico de Saca ha dicho que no incrementará el impuesto sobre la renta y no tocará el IVA. El presidente ha dicho, además, que al final del año tendrá entre manos un plan fiscal que le permitiría enfrentar los compromisos adquiridos desde que asumió el poder. De ahí que Saca esté jugando a ponderar los intereses de una sociedad que le exige más de sí y una clase pudiente —los mayores evasores fiscales y los que más pueden contribuir a la reforma social— que se niega a poner en juego sus jugosos ingresos.

Desde esta perspectiva, pareciera que se encuentra en juego una mayor justicia fiscal —un innegable bastión de la izquierda—; pero no hay que hacerse ilusiones: el actual gobierno eludirá cualquier compromiso que le lleve a enfrentarse con la clase empresarial de la cual es deudora. Si así fuera, el mandatario ya habría conseguido de sus aliados un aumento salarial en la mesa por el empleo; pero el tema ni siquiera fue abordado en una mesa a la que llegaron los más altos dignatarios del empresariado y el sector financiero salvadoreño. En suma, la reforma social no es más que una quimera sin el respaldo económico necesario.

Sobre el alcance de la gestión social no hay un criterio unificado entre la población y, más bien, la percepción es muy variada. Una parte de ella se cuela el optimista balance gubernamental, poniendo de relieve las acciones concretas arriba mencionadas. Sobre este grupo hay que decir que soslaya el también evidente hecho de la provisionalidad de lo realizado hasta el momento, lo cual matiza cierto optimismo que se maneja como moneda al uso entre la opinión pública. Es decir, de lo hecho en

escasos cien días no puede concluirse nada más allá de lo provisional, lo proyectado.

Un segundo grupo de salvadoreños no ve un solo logro en el periodo en cuestión, aunque reconoce que el clima de crispación política que caracterizó los últimos días de Francisco Flores al frente del Ejecutivo dio lugar, de manos de Saca, a un ambiente de mayor entendimiento y acercamiento entre las distintas fuerzas políticas del país. Acertada o no, tal apreciación niega cualquier signo que indique que la agenda social ha sido retomada con la intensidad que se lee en los discursos oficiales. Finalmente, hay quienes sostienen que Saca y su gobierno han dado algunos pasos —todo lo incipientes que se quiera— en la construcción de una reforma social prometedora, pero que ello no asegura el éxito de la misma. En este sentido, habría que decir que este optimismo —por demás moderado— encuentra su asidero en la seguridad de que la capacidad financiera del gobierno condiciona la eficacia de una reforma social.

Mientras tanto, los desafíos están presentes. En materia educativa, por ejemplo, el plan 20-21 emerge como un proyecto prometedora, incluyendo y sumamente ambicioso. El mismo reúne a diversas personalidades de distinto credo ideológico para consensuar las medidas que le darán vida. Además, dicen sus gestores, cuenta con el apoyo decidido del empresariado salvadoreño, y en las fotografías del primer encuentro de la comisión de notables, uno de los más importantes empresarios nacionales aparecía al lado de la ministra de Educación. No obstante las intenciones, se vuelve al punto de inicio: está por verse el apoyo financiero y la verdadera voluntad de sus gestores.

En lo tocante al sector salud, los proyectos no se presentan con la misma ambición, pero no se renuncia al optimismo. A finales de septiembre, el presidente Saca apareció inaugurando un hospital “de primer mundo” destinado a atender a los cotizantes del Seguro Social; días antes se había anunciado la ampliación de la cobertura de los hijos de éstos hasta los 12 años. El gobierno anuncia adicionalmente un proyecto de inversión millonaria en la red del Seguro Social y la red nacional hospitalaria. Al mismo tiempo, la llamada mesa de gobernabilidad ha discutido —y nada más que eso— la revitalización de la reforma integral del sector salud.

En suma, se han abordado aspectos neurálgicos del sector, pero sin tratarlos con medidas que su-

gieran un incremento significativo en la calidad del servicio de salud que recibe la población. Nuevamente los ingentes retos minimizan las acciones concretas. Hay otros asuntos pendientes como la implementación de una política integral de vivienda, la dignificación de los empleos y las tareas inmediatas de reducción de la pobreza sobre todo en las zonas del país más deprimidas.

Sobre lo segundo que hay que insistir es sobre la dinámica de los principales partidos políticos salvadoreños, por su incidencia en el conjunto de la dinámica nacional. Y es que en marzo de este año se cerró un ciclo electoral en el país. Aparentemente, lo que se tendría —hasta las siguientes elecciones— iba a ser un clima de reducida politización, es decir, un ambiente en el cual los funcionarios electos en marzo —comenzando por el presidente de la República— dedicarían lo mejor de sus energías a resolver los principales problemas del país en los planos económico y social. Pero esto no ha sido más que un sueño o buen propósito, porque en ARENA los procesos electorales nunca se cierran; al contrario, hay en ellos una continuidad permanente que obliga al partido a no bajar la guardia de una elección a otra, sin importar el lapso de tiempo que medie entre ambas.

Inmediatamente después de la elección presidencial de marzo, ARENA inició sus preparativos de campaña para las elecciones municipales y legislativas del 2006. Poco después, ese partido entró en campaña abierta. Los cien primeros días del presidente Saca, con todo el respaldo mediático que los caracterizó, fueron una pieza más de la estrategia de campaña arenera. En septiembre, voceros del partido proclamaron estar en campaña en vistas a las próximas elecciones. Este estado de alerta permanente de ARENA en materia electoral es, en parte, lo que explica su éxito político. El partido de derecha ha aprendido que para ganar elecciones se requiere cuando menos de una movilización continua de las bases y de una presencia constante en el imaginario social. Lo primero supone que el contacto con las bases no se rompa y, para ello, esas bases deben ser convocadas, atendidas y motivadas. Esto no sería fácil si, después de una elección, la siguiente fuera vista como algo lejano, como algo que sucederá en el futuro.

En ARENA sucede justamente todo lo contrario: las elecciones que vienen después no son algo lejano, sino un desafío inmediato, al que debe responderse ahora mismo. Pero no basta solo con el

contacto con las bases. Un partido que quiera ganar elecciones en El Salvador debe mantener, como ya se señaló, una presencia permanente en el imaginario social. Aquí ARENA cuenta no solo con unos ingentes recursos financieros para diseñar y costear su “proyección simbólica”, sino con el respaldo de los grandes medios de comunicación que no han escatimado esfuerzos para hacer que los salvadoreños sientan y vean la realidad como lo desean los jerarcas y estrategias del partido de derecha.

No cabe duda de que, desde los intereses de ARENA, estar en campaña permanente le es particularmente favorable. La pregunta que tiene que hacerse es qué tanto eso es favorable para El Salvador. Y, desde esta óptica, hay que decir que, lejos de ser conveniente, la campaña permanente de ARENA va en detrimento del país. Primero, por el lado de los recursos gastados: la campaña permanente de ARENA drena al Estado recursos importantes —todo lo invertido en publicidad política— que podrían ser utilizados en obras sociales impostergables. Segundo, por el lado de la responsabilidad de los funcionarios de alto rango y de rango medio: por estar en campaña no dedican el tiempo y las energías que deben a atender los problemas de la sociedad —que es la que les sostiene sus salarios, prestaciones y beneficios—. Tercero, por el lado de la legalidad: la campaña permanente violenta las normativas y los preceptos legales que regulan los calendarios electorales. Cuarto, por el lado de la competencia y la equidad política: los demás partidos, con menos recursos y menos capacidad movilizadora, quedan en total desventaja respecto de ARENA. Finalmente, por el lado de la polarización social: la movilización política permanente supone la demarcación también permanente de los grupos sociales, lo cual es preocupante en una sociedad fragmentada y violenta como la salvadoreña.

Al interior del FMLN el panorama varía sustancialmente. Saca se encuentra en la cúspide de la aprobación de los ciudadanos. El FMLN, por su parte, naufraga en una crisis interna que no le deja tiempo ni espacio para hacerse escuchar en el debate político del país. Dentro de dos años se celebrarán elecciones municipales y legislativas y, bien podría pensarse, si las cosas siguen en la misma dirección, Saca podría hacerse con la mayoría automática en el congreso.

Con la desaparición, legalmente —salvo que los políticos criollos sigan inventando subterfugios

jurídicos para evitar el cumplimiento del código electoral respecto de la cancelación de las organizaciones políticas— de los otros partidos de oposición, la elección sería un enfrentamiento entre dos fuerzas desiguales: una moribunda y otra en plena euforia de victoria y evaluación positiva. No cabe duda que los efemelenistas no desean llegar a las próximas elecciones en estas condiciones. Los diferentes grupos que toman parte en el conflicto interno han presentado sus ideas para el fortalecimiento y renovación de su partido.

No cabe duda que la capacidad del FMLN para hacer frente a la popularidad creciente y vacía de Saca pasa previamente por la solución de su división interna. En todo caso, la postura de Schafik Handal condena al FMLN a la oposición permanente para mientras que se logre acumular las fuerzas necesarias de concientización de la mayoría de las masas para vencer la resistencia de los grandes empresarios. Como estrategia es válida, pero la pre-

gunta que conviene hacerse es si es plausible en esta coyuntura política nacional e internacional o si las mismas masas están interesadas en ello.

La postura más abierta de Óscar Ortiz en cambio, parece más a tono con los requisitos del nuevo sistema. Habla de la necesidad de superar los viejos vicios del partido para garantizar que sea una verdadera opción para alcanzar el poder político en el país. Es una estrategia que no pretende acumular fuerzas revolucionarias para cambiar el sistema. En ese sentido, es una propuesta más realista y coherente con la realidad actual del país y del mundo. ¿Contará con el apoyo interno para llevar adelante sus propuestas? De la respuesta que den los militantes en las elecciones internas de noviembre próximo, se sabrá si el partido de izquierda ha elegido la oposición permanente para acumular fuerzas, o si ha decidido asomarse al camino de un verdadero cambio para revertir el populismo de Saca.

